

Ciudad y fecha

Señores

Jueces de la república

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (REPARTO)

Referencia: Acción de Tutela – Medida Provisional. Accionantes:

JAVIER ALEJANDRO AGUILAR QUINTERO

Accionados: Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral.

JAVIER ALEJANDRO AGUILAR QUINTERO, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80135036, actuando en nombre propio, amparado en el artículo 86 de la Constitución Política Colombiana y el Decreto 2591 de 1991 que lo reglamenta, acudo a este Tribunal con el fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil representada legalmente por el Señor **Alexander Vega Rocha** y contra el **Consejo Nacional Electoral representado legalmente por la Señora Doris Ruth Méndez Cubillos**, por la violación de nuestro derecho fundamental a elegir y ser elegido, como expresión de nuestros derechos de participación política; a conocer la verdad electoral y a que esta se materialice; así como del derecho colectivo a la moralidad administrativa, con base en los hechos y fundamentos jurídicos que expongo a continuación. La presente acción de tutela tiene como objetivo que se garantice el ejercicio democrático que constituyen las elecciones y que los Ciudadanos Colombianos contemos con todas las garantías necesarias para ejercer para la efectividad y conteo de los votos depositados por en las urnas. Lo anterior, con base en los hechos y fundamentos jurídicos que exponemos a continuación: 1. HECHO PRIMERO: No ha sido posible ejercer el derecho al voto a miles de Ciudadanos Colombianos porque la Registraduría Nacional alquiló un software para hacer la inscripción por internet, en el cual, después de diligenciar toda la información requerida y seguir todos los procedimientos, les informaron que su inscripción no fue válida porque no funcionó el módulo del reconocimiento facial. Como consecuencia de lo anterior no pidieron ejercer su derecho al voto tanto en el interior del país como en los consulados, a los residentes en el exterior. 2. HECHO SEGUNDO: No ha sido posible ejercer el derecho al voto a miles de Ciudadanos Colombianos residentes en el exterior porque la Registraduría Nacional alquiló un software para hacer la inscripción pero miles de residentes en el exterior y otros miles de colombianos hicieron todo el trámite presencial, como lo establece la ley, pero al llegar a ejercer su derecho al voto encontraron que aún están registrados en su lugar anterior de residencia (en Colombia para los residentes en el exterior), la solución que les dio la Registraduría Nacional fue que ejercieran su derecho al voto en ese lugar, lo cual fue física, material y económicamente imposible para los citados miles y miles de Colombianos con este problema. 3. HECHO TERCERO: La inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales del próximo 19 de mayo tampoco la podrán hacer miles y miles de Colombianos porque de manera unilateral, inconsulta y sin tomar en cuenta a quienes

afecta, la Registraduría Nacional decidió acatar la ley, deshabilitó el software para la inscripción por internet y obligar a hacer la inscripción presencial pero no implementó la infraestructura necesaria para ello. Con lo cual, nuevamente, física, material y económicamente es imposible para los miles y miles de Colombianos que no pudieron votar el 13 de marzo de 2022 por los problemas enunciados en los hechos primero y segundo.

4. HECHO CUARTO: Como es sabido por todos la base de datos de los ciudadanos que podemos votar llamada DIVIPOLE no es transparente, hay serios inconvenientes en su contenido, aparecen habilitadas para votar muchas cédulas cuyos portadores deben ser ya difuntos, salvo que sean inmortales, al buscar la cédula **No.51 aparece habilitada para votar en BOGOTÁ D. C., Puesto COLEGIO AMERICANO, CARRERA 22 No. 45 A - 51, Zona 13, mesa 1**; la cédula **No.52 aparece habilitada para votar en BOGOTÁ D. C., Puesto CHICO LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR, CLL 86 No. 7 - 40, Zona 2, mesa 1**; así hay muchas más.

5. HECHO QUINTO: La DIVIPOLE debe ser una sola y única, debe ser pública o al menos permitir que sea auditada, porque es un completo misterio, sin embargo al investigar, la Registraduría Nacional tiene DOS (2) DIVIPOLE, una que se utilizó para los ciudadanos en el exterior de lunes a sábado y la real que se utilizó para ejercer el derecho al voto el 13 de marzo de 2022.

6. HECHO SEXTO: El software alquilado para informar el puesto y mesa de votación “infovotantes” no funcionaba el 13 de marzo de 2022, por lo cual otros miles de Colombianos no pudieron ejercer su derecho al voto y después de largas horas sin obtener la información y ante el desorden ocasionado por esta situación, dentro y/o a la entrada de los puestos de votación se resignaron a no poder ejercer su derecho al voto, no sin antes manifestar su indignación (Ver noticieros de televisión del 13 de marzo de 2022).

7. HECHO SEPTIMO: Los Jurados de Votación, en su inmensa mayoría jóvenes, recibieron una capacitación de DOS (2) horas, dictada por personas de escasa capacidad para transmitir conocimientos y/o poco manejo del tema porque al entrevistarlos a cerca de los errores que estaban cometiendo en el proceso decían “eso nos explicaron en la capacitación” y por eso los millones de errores registrados en el proceso electoral pero principalmente en la elaboración de las actas de cierre de mesa de votación (Formularios E-14).

8. HECHO OCTAVO: No hubo transparencia en el proceso de inscripción y selección de Jurados de votación

9. HECHO NOVENO: No hubo transparencia, ni eficacia, ni celeridad en la inscripción y acreditación de testigos de mesa de votación y testigos de escrutinio.

10. HECHO DECIMO: Miles de ciudadanos denuncian que “El trece (13) de marzo de 2022 voté en el puesto XXX de la ciudad XXX mesa XXX y revisando el E-14 publicado en la página de la registraduría, en esa mesa no aparece voto por los candidatos por los cuales yo si voté para Senado y Cámara”.

11. HECHO DECIMOPRIMERO: Más de 72 horas después de terminadas las elecciones, aun se encontraban digitalizados los formularios E-14, no estaban en la plataforma virtual de la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuesto por la organización electoral para tal fin.

12. HECHO DECIMOSEGUNDO: Al participar en las comisiones escrutadoras se han evidenciado errores aritméticos en miles de formularios E-14, tachones, borrones, enmendaduras, inconsistencias entre el número de votos de las urnas y los sufragantes registrados por mesa en el correspondiente formulario E-11.

13. HECHO DECIMOTERCERO: A continuación, hago relato de algunas de las denuncias que hemos recopiladas de las noticias y/o de las redes sociales, en todas las regiones del país, en las

cuales los Colombianos han denunciado que sus votos no se encuentran registrados en los E-14 y en algunas oportunidades son registrados como votos nulos, se han documentado:

1. Zona: 11. Puesto: 11. Mesa: 007. Lugar: Centro Comercial Santafé. Observaciones: manifiesta la señora Yudy Vanegas que su voto el cual fue marcado correctamente, no se encuentra registrados en el E-14;
- Zona: 11. Puesto: 30. Mesa: 18. Lugar: Colegio Celestin Freinet. Observaciones: se reporta por parte de un ciudadano que su voto no se encuentra registrado, pese a ejercerlo correctamente. Evidencia: Certificado electoral y E-14 5
3. Zona: 02. Puesto: 01. Mesa: 010. Lugar: Mega Colegio Nacional, Codazzi. Observaciones: Mal escrito la cifra en el E-14
4. Zona: 02. Puesto: 02. Mesa: 016. Lugar: Los Patios, Norte de Santander. Observaciones: No aparecen los votos de José Daniel Murillo y familiares. Evidencias: Certificado electoral - (Se anexa el E-14) 6
5. Zona: 11. Puesto: 52. Mesa: 002. Lugar: Colegio Pedagógico Dulce María, Bogotá. Observaciones: No se reportan votos por el 22, pese a que se reporta por parte de algunos de mis simpatizantes votos por mí en esa mesa. Evidencias: Se anexa E-14 donde se puede observar que el número 22 de la lista de la Coalición Centro Esperanza, no registra votos.
6. Zona: 99. Puesto: A1. Mesa: 009. Lugar: Villagorgonia A, Bogotá. Observaciones: No se registra el voto, pese a que algunos simpatizantes del equipo han manifestado registrar votos en dicha mesa de votación. Evidencias: Se anexa certificado electoral y E-14 7
7. 14. HECHO DECIMOCUARTO: Los hechos relacionados anteriormente guardan relación con las causales dispuestas en el artículo 265 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 192 del Código Nacional Electoral. Hay irregularidades que constituyen errores aritméticos, inconsistencias entre el número de sufragantes y votos en urna, tachones, falta de anotaciones sobre estos hechos en los formularios E-14. También se evidencia que se desconoció, en algunos casos, la voluntad del elector, decretando en algunos casos votos válidos como nulos; situación que afectó la totalidad de la votación y, con ello se trasgredió el derecho a elegir y ser elegido.

**SOBRE LA PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN:**

**A. COMPETENCIA** Este Tribunal es competente para conocer, en primera instancia, de esta solicitud de tutela, de acuerdo con lo pautado en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991. Así como de conformidad con lo prescrito en el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, por el cual se fijan las reglas de reparto de la acción de tutela, que dispone, en lo pertinente, lo siguiente: “3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República, del Contralor General de la República, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la República, del Contador General de la Nación y del Consejo Nacional Electoral serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos” (énfasis agregado). Como quiera que la presente acción constitucional está dirigida contra el Registrador Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral y dadas las reglas de competencia establecidas en el Decreto 1983 en cita, el juez natural de esta acción, en primera instancia, es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante quien elevado la presente reclamación.

**B. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA**

1) Sobre la Legitimación en la Causa por Activa: El artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten

amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario. Por su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa. Ahora bien, por la legitimación por activa de la persona se entiende la calidad subjetiva que se tiene al ser interesado en el proceso que se adelanta por la vulneración de sus derechos. La legitimación en la causa es entonces la “garantía de que la persona que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”<sup>1</sup>. Así, una persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante o lo representa legítimamente. La vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral como accionadas en la presente acción de tutela se basa en las funciones que le son propias a esta entidad y a este CNE en relación con la estructura de la organización electoral y las funciones que le son asignadas a cada una de estas para el desarrollo de los comicios electorales. Cabe señalar, que esta legitimación por activa no obstaculiza que el juez de tutela de encontrarlo necesario podrá realizar la vinculación a la misma de otras entidades y/o actores que tengan interés de participar de la litis. Por lo expuesto anteriormente, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral son vinculados a este proceso constitucional por la lesión que ha generado sobre los derechos fundamentales a ser elegido y ser elegidos y a conocer la verdad electoral de quienes participamos como candidatos a las elecciones del Congreso de la República y a quienes no nos han garantizado la transparencia en la realización de los comicios electorales. C. INMEDIATEZ Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento y lugar”. En tal sentido, la Corte Constitucional ha considerado que esta debe instaurarse dentro de un plazo razonable, el cual se determinará según las circunstancias de cada caso en concreto: “La inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. La satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso”<sup>3</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-1015 de 2006 de 30 de noviembre de 2006. M.P.: Alvaro Tafur Galvis. <sup>4</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-1001 de 2006 de 30 de noviembre de 2006. M.P.: Jaime Araujo Rentería. <sup>11</sup> concreto. Esa razonabilidad se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental”<sup>5</sup>. Conforme a lo expuesto en los hechos de la presente acción, se expresa que el domingo trece (13) de marzo de 2022 se llevaron a cabo las elecciones para el Senado de la República y la Cámara de Representantes, dándose inicio después de las 4:00pm tal como está previsto en la Constitución y la Ley a los preconteos, registros de los E-14 y posteriormente a la instalación de las Comisiones Escrutadoras, las cuales se

encuentran abiertas y realizando la consolidación de los resultados emitidos en cada mesa y puesto de votación. Por lo que es posible señalar que nos encontramos en el momento procesal adecuado para exigir la protección de mi derecho a elegir y ser elegido y la disposición de las garantías necesarias para que se garantice la verdad electoral, la eficacia del voto y la voluntad del elector.

D. SUBSIDIARIEDAD El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. De otra parte, el numeral 1 del artículo 6 del decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela no procede: “(...) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. En el caso bajo estudio, la acción de tutela es el medio idóneo para evitar que se prolongue en el tiempo la vulneración del derecho fundamental a elegir y ser elegidos, así como del derecho a la participación política y a conocer la verdad electoral. Actualmente, no existe en el ordenamiento jurídico colombiano otro mecanismo que obligue a adoptar, de manera inmediata, las medidas necesarias que garanticen el restablecimiento de estos derechos, dado que desde el cierre de las urnas el pasado trece (13) de marzo de 2022 a la fecha se han empezado a identificar irregularidades en los conteos, anulación de los votos, errores aritméticos en los E-14 y diversos cuestionamientos sobre los preconteos y rec conteos de los votos. De esta forma, la acción de tutela es en estos momentos atendiendo a la premura del tiempo y dado que estamos próximos a que finalicen las comisiones escrutadoras y se declaren los elegidos para ocupar las curules del Senado de la Republica y la Cámara de Representantes.

5 Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 30 de abril de 2015. M.P.: Martha Victoria Sáchica Méndez 12 ganadores de la contienda electoral; constituye el mecanismo idóneo para la protección eficaz de mis derechos fundamentales y el evitar que se presenten perjuicios irremediables.

E. JURAMENTO. Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto acción de tutela por los hechos descritos en el presente documento, ni he solicitado el amparo de los derechos que aquí señalo violados. En consecuencia, los hechos, los derechos y las pretensiones que motivan la presente acción, no han sido sometidos a conocimiento ni juzgamiento previo ante ninguna otra autoridad judicial.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO: VIOLACIONES ALEGADAS Atendiendo a los hechos narrados, analizo la violación del derecho a elegir y ser elegidos, entendido éste como un derecho de participación política, y el derecho a conocer la verdad electoral.

1) Sobre los derechos de participación política, el derecho fundamental a ser elegidos y el principio democrático: Los derechos políticos según lo expresara Miguel Concha Malo, constituyen una categoría de los derechos humanos, bajo la cual se protege y garantiza la participación de todos los individuos en la dirección de los asuntos públicos. De igual forma, Antonio Pérez Luño afirmó que los derechos políticos, al integrar el conjunto de los derechos humanos, son al igual que éstos, potestades orientadas a posibilitar y garantizar, en condiciones de dignidad, libertad e igualdad, la participación de sus titulares en la definición de los asuntos públicos que lleguen a interesarles, y cuyo disfrute y ejercicio debe ser garantizado a todos los seres humanos. Por participación ha de entenderse tanto

el ejercicio activo de los derechos políticos, como la apuesta abstencionista de los mismos, la cual ha sido reconocida como otra forma de construcción social. Como lo veremos durante todo el texto, el llamado de las conquistas que sobre este tipo de derechos se han alcanzado es a la superación de los obstáculos que impedían su ejercicio, para que una vez se verifiquen en cabeza de los individuos, ellos hagan uso de esas facultades como mejor corresponda a sus apuestas y convicciones políticas, sociales y personales. Así, Alain Touraine manifestó: “Llamo sujeto a la construcción del individuo como actor, por la asociación de su libertad afirmada y su experiencia vivida, asumida y reinterpretada. El sujeto es el esfuerzo de transformación de una situación vivida en acción libre; [e]l sujeto resiste y se afirma al mismo tiempo mediante su particularismo y su deseo de libertad, es decir de creación de sí mismo como actor, capaz de transformar su medio ambiente, de acuerdo a los medios legítimos que prefiera”. Cfr. TOURAINE, Alain. ¿Qué es la democracia? Fondo de cultura económica. Segunda Edición. México. 2006. P. 22. 7

CONCHA MALO, Miguel. “Los derechos políticos como derechos humanos. Concepción y defensa”. En: CONCHA Malo, Miguel et al. Los derechos políticos como derechos humanos: la lucha por la democracia en México. UNAM. México. 1994. P. 17 y 18. Así expresó: “Los derechos políticos son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”. Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, et al. Los derechos humanos: significación, estatuto jurídico y sistema. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 1979. P. 43. 13

Los derechos políticos se encuentran asociados a la democracia en tanto eje axial del sistema jurídico colombiano. En efecto, la participación política que se deriva de los derechos políticos está estrechamente vinculada con la soberanía y la representación democrática; por lo que protegerlos y garantizarlos hace parte de los principios esencial del Estado Social de Derecho en el cual nos encontramos. Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-150 de 2015 reconoce la importancia de estos derechos en cuanto permiten establecer: “(...) La fundamentación del poder político ejercido por los diferentes órganos (la democracia como fuente de legitimidad), para reconocer y tutelar los derechos de participación de los individuos y la sociedad en la conformación y control del poder político e imponer deberes de respeto y protección al Estado y a los particulares (la democracia como fundamento de derechos y obligaciones) y para definir la forma en que tal poder opera democráticamente y los ámbitos en los que su aplicación puede exigirse (la democracia como expresión de reglas de funcionamiento y toma de decisiones)”. Es así, como los derechos políticos hacen parte esencial de los derechos humanos de los individuos, al ser el desarrollo de sus libertades personales. Por lo cual, es necesaria la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar el efectivo goce y ejercicio de estos. Los derechos políticos, son el resultado de conquistas sociales, incentivados por el deseo de erradicar en sus territorios regímenes autoritarios y garantizar las reivindicaciones de los derechos individuales y colectivos. Así, su importancia y la de su efectivo ejercicio radica, al interior de un Estado democrático, en que a través de ellos es viable la construcción de un sistema en el que exista una verdadera cultura de los derechos humanos; hacen posible la oposición a los regímenes que los desconocen y violan de manera sistemática, y, conducen a la observancia de



normas legítimas en una sociedad que controla a sus autoridades y colabora con ellas. Por lo anterior, es posible señalar que el ejercicio de los derechos políticos contribuye al desarrollo de los principios democráticos al interior de los Estados, dado que a través de estos se desarrolla y garantiza la voluntad tanto popular como estatal. Siendo deber de todas las instituciones estatales garantizar el ejercicio de estos derechos en todo tiempo; no siendo posible su suspensión ni siquiera en los estados de excepción. Esto en concordancia con lo dispuesto por (...). Al respecto, es preciso mencionar que la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), instrumento internacional de protección en materia de derechos humanos en la región americana, en su Art. 27 no admite que los derechos políticos sean sometidos a alguna clase de suspensión o derogación. Así establece: “Artículo 27. Suspensión de Garantías. 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, (...) la Corte Constitucional en la Sentencia T-469 de 1992 en la que ha señalado que el derecho político es un derecho fundamental en una democracia representativa, expresando: “El derecho a participar en la vida política del país, en este caso mediante el mecanismo del voto, es un derecho constitucional fundamental y, por tanto, es un derecho tutelable”. 2) Derechos de participación política, el derecho a ser elegido. El mandato constitucional dispone en el artículo 40 que: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”. El derecho de participación política, en una de sus manifestaciones, se materializa como el derecho a ser elegido, es decir a representar una colectividad. En este sentido, la Sentencia T-232 de 2014 de la Corte Constitucional cita: “(...) El derecho a elegir y ser elegido es, un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18

(Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad) y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. [...]” (énfasis nuestro). A propósito de lo anterior, Tarcisio Navarrete al referirse a los derechos políticos afirmó: “Así la Convención Americana otorga la más alta jerarquía a estos derechos junto con otros como el derecho a la integridad corporal, el derecho a la vida, el principio de legalidad y retroactividad, la protección de la familia y los derechos del niño”. En: NAVARRETE MONTES DE OCA, Tarcisio. “Los derechos políticos y su defensa en el derecho internacional”. Op. Cit. P. 75. 15 también, a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera connotación es sinónimo de la libertad individual para acceder a los medios logísticos necesarios e informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función. En el mismo sentido, la segunda característica, que podríamos llamar pasiva, consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado (...). La Corte Constitucional ha señalado en su Sentencia C-511 de 1999 que: “la ciudadanía es [...] el presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos”. Por lo que esta es la encargada a través del voto desarrollar todas las formas de expresión de la soberanía y la voluntad popular; a elegir en forma directa a sus representantes; a ser elegidos y a ejercer cargos públicos. De igual forma y en desarrollo de los derechos políticos que tienen los ciudadanos colombianos, la Corte Constitucional ha señalado en la Sentencia T-469 de 1992 los valores jurídicos que configuran el sistema electoral, tales son “el secreto del voto, la independencia del elector, la autonomía de la función electoral y el compromiso de ésta con la verdad y libertad del sufragio”. Este último se encuentra gravemente amenazado ante la imposibilidad de inscribirse para ser incluido en el censo electoral, las graves denuncias que se han realizado sobre un presunto fraude electoral, sobre el cual se han pronunciado todas las fuerzas políticas que participaron en la contienda electoral y quienes han visto a **UN (1) día** del cierre del plazo para la inscripción de cédulas de votantes y el cambio de puesto de votación y a pocos días del cierre de escrutinios tenemos serias irregularidades y cuestionamientos sobre el conteo y recuento de los votos. Lo anterior, afecta la voluntad popular y mi derecho fundamental y el de todos los candidatos al Congreso de la República a la participación política desarrollada en el derecho a elegir y ser elegidos. Ante la importancia que reviste la participación ciudadana, como derecho fundamental de los ciudadanos, la Corte Constitucional ha dispuesto en la Sentencia C-150 de 2015: “(i) el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas de cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, (ii) el deber de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación y (iii) el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados. 10 De acuerdo a los Art. 260 y 323 CP, elegirá directamente a: el Presidente de la República, el Vicepresidente, los senadores, los representantes, los gobernadores, los diputados, los alcaldes, los concejales, los miembros de juntas administradoras locales, los ediles del distrito capital y los miembros de la asamblea nacional constituyente. 16 Estos



deberes del Estado se concretan en deberes específicos a los que a continuación la Corte se refiere: (i) El deber de abstenerse de estatizar la democracia y, en consecuencia, la obligación de proteger el pluralismo, (ii) Deber de promover formas de participación democrática que comprendan no solo la intervención de partidos o movimientos políticos sino también de organizaciones sociales de diferente naturaleza. (iii) Deber de promover estructuras democráticas en las diferentes formas de organización social. (iv) Prohibición, que vincula a todos los órganos públicos, funcionarios y particulares, de eliminar alguna de las dimensiones de la democracia. (v) Mandato de no sustituir a las autoridades estatales competentes en el desarrollo de actividades de control”. Atendiendo a lo expuesto, es posible afirmar que los accionados han incumplido con el deber de adoptar medidas que eviten que se interfiera o se afecte la participación ciudadana en las elecciones y en las comisiones electorales, y el derecho a elegir y ser elegido; dado que la omisión de ejercer todas las medidas de seguridad y transparencia, transgrede los derechos tanto de los Ciudadanos Colombianos como de los candidatos y de todos los colombianos que confiando en el sistema democrático acudimos a las urnas a expresar su voluntad popular.

3) El derecho a ser elegido. El principio democrático, cimiento estructural de la fórmula política del Estado colombiano, se materializa con el correcto funcionamiento de diversos postulados entre los que se encuentra el principio de eficacia del voto; sobre el cual dispuso el Código Electoral en el numeral 3 artículo 1 que: “(...) Artículo 1. (...) En consecuencia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y, en general, todos los funcionarios de la organización electoral del país, en la interpretación y aplicación de las Leyes, tendrán en cuenta los siguientes principios orientadores: (...) 3. Principio de la eficacia del voto. Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector (...)”. Al respecto señaló el Consejo de Estado: “(La) legislación por excelencia para las elecciones por voto popular, en su catálogo de principios, destaca el llamado principio de eficacia del voto, definido como la preponderancia de la interpretación que le dé validez al voto para que así represente la expresión de la libre voluntad del elector”. Es así como es necesario que todas las autoridades estatales dispongan de las medidas necesarias para adoptar interpretaciones que protejan la validez de la voluntad popular expresada mediante el sufragio, pretendiendo garantizar la manifestación inequívoca del querer popular. Por lo cual, para lograr esta materialización, es necesario que el proceso electoral para el caso en concreto de los colombianos en el exterior, esté desprovisto de cualquier actuación que pueda afectar los resultados electorales, como puede ocurrir al no garantizar la seguridad y ubicación de sitios que no permitan que los colombianos que se encuentran residiendo en otro territorio tengan las facilidades para ejercer su derecho al voto.

4) Autenticidad de las elecciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- de la misma manera en el Informe 1/90 indica que la “autenticidad” de las elecciones: “[...] significa que debe existir una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de las elecciones. En sentido negativo, esta característica implica la ausencia de coerciones que distorsionen la voluntad de los ciudadanos. Agrega la Comisión que, en virtud de ello, “[...] la autenticidad de las elecciones abarca dos categorías diferentes de fenómenos: por un lado, los referidos a las condiciones generales en que el proceso electoral se desarrolla y, por otro lado, aquellos fenómenos vinculados

con el sistema legal e institucional que organiza las elecciones y que ejecuta las acciones propias del acto electoral, es decir, aquello relacionado de manera directa e inmediata con la emisión del voto. De esta manera en el caso concreto se observa que la voluntad de mucho de los votantes fue limitada y trajo como consecuencia el no poder contar con el número de votos reales por fallas en la verificación de cada uno de los votos registrados. Y resulta ser inaudito que a más de 15 días de terminadas las elecciones, aún haya formularios E -14 que no están en la plataforma virtual de la Registraduría, específicamente de los consulados, es decir, de las elecciones en el exterior. La CIDH amplió su criterio interpretativo y citando al Comité de Derechos Humanos, concluyó que los artículos 23 y 24, que recogen la igualdad ante la ley, garantizan el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, y el respeto a esta garantía implica que no existan “Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de marzo de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 54001- 23-33-000-2016-00002-01 discriminaciones entre las personas cuando ejercen ese derecho en los criterios y procedimientos para el nombramiento y ascenso. **IV. MEDIDA PROVISIONAL.** El artículo 7° del Decreto 2591 de 1991 faculta a los jueces de tutela para decretar medidas provisionales a solicitud de parte o de oficio. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la adopción de medidas provisionales por el juez de tutela tiene, por lo menos, tres objetivos: (i) proteger los derechos de los demandantes para impedir que un eventual amparo carezca de un efecto útil; (ii) salvaguardar los derechos fundamentales cuya vulneración o amenaza se encuentra en discusión; y (iii) evitar otros daños como consecuencia de los hechos objeto de la acción de tutela. En el presente caso solicito la adopción de una medida provisional, consistente en la ampliación del plazo para la inscripción de cédulas y el cambio de lugar de votación por todos los errores y todas las presuntas irregularidades en el proceso de inscripción. Lo anterior se sustenta en evitar perjuicios irremediables, hasta tanto se resuelva de fondo el amparo aquí solicitado y la decisión quede en firme. De igual forma, es pertinente señalar que es procedente la presente medida, atendiendo a que de no adoptarse de forma inmediata y a medida que avanza el proceso electoral, se causan trasgresiones a mis derechos fundamentales y con ello perjuicios irremediables, los cuales no podrían ser saneados de presentarse el cierre de la inscripción de cédulas y la continuación del proceso electoral. De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen. La Acción de Tutela como mecanismo transitorio, el artículo 8° ibidem dispone en lo pertinente: “(...) Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos, procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Se formula la Acción de Tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y los consiguientes que se causarían al pueblo colombiano, en el ejercicio de su soberanía y de los mecanismos de participación democrática consagrados en el título IV, capítulo I, artículo 103 de la Constitución Política, y en aquellos otros consagrados en el Capítulo II artículos 107 y subsiguientes de la Constitución Política. Ya que, al no poder contar con inscripción de la cédula los

ciudadanos pierden la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Y, sin el correcto registro de los votos en preconteo y la adecuada validación de los votos en los escrutinios, los derechos políticos de los Ciudadanos Colombianos no tendrán eficacia, por el contrario, los condenaría a Colombia a un régimen político permanente que va en contra de los intereses de las mayorías y se impedirá expresar la voluntad popular, por lo que esta consecuencia se consideraría irremediable. de la misma manera se afecta el derecho fundamental a elegir y ser elegido, esto es una amenaza grave y eminente por lo que está presente la necesidad, de forma que la orden de tutela sea indispensable para evitar el daño, y la impostergabilidad, de manera que la medida se debe tomar en forma inmediata, no da espera (Sentencia T-306/14). V.

**PRETENSIONES** Con fundamento en los argumentos fácticos y jurídicos expuestos, solicito: (i) AMPARAR mis derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a la participación política y a conocer la verdad electoral, violados por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL como consecuencia de todo lo expuesto en materia de inscripción de cédulas; registro, selección y capacitación de Jurados de Votación; registro, capacitación y acreditación de Testigos de Votación en las mesas de votación y en los escrutinios. (ii) En virtud de todo lo anterior, se ORDENEN las siguientes medidas para el restablecimiento pleno de mis derechos y las garantías del desarrollo del certamen democrático que tendrá lugar en el país el próximo veintinueve (29) de mayo de 2022 y en el exterior del veintitrés (23) de mayo de 2022 al veintinueve (29) de Mayo de 2022: a. Se ORDENE al REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL la implementación de todas las medidas y acciones necesarias para garantizar mi derecho a elegir y ser elegido y a la verdad electoral en los escrutinios que se desarrollarán entre veintitrés (23) de mayo de 2022 y el veintinueve (29) de mayo de 2022. b. Se ORDENE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL la ampliación del plazo para la inscripción de cédulas y la disposición e implementación de la logística necesaria para garantizar el derecho de la Ciudadanía Colombiana a inscribir su cédula y ejercer su derecho al voto en el lugar que cada uno solicite; c. Se ORDENE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que se modifique el calendario electoral programando jornadas para que los partidos políticos, las coaliciones que tienen candidatos y, los Veedores y Observadores Nacionales e Internacionales podamos conocer el software alquilado a la UT DISPROEL (todos los componentes o programas) y el Software comprado para hacer la sumatoria de los votos obtenidos de los departamentos, comprado a INDRA, para dar el resultado final de las elecciones. d. Se ORDENE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que se permita hacer la auditoría tanto del software alquilado a la UT DISPROEL como del comprado a INDRA. e. Se ORDENE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, que se hagan los simulacros necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de todo del software y se suministren los archivos LOG.CSV, los MMV.CSV de Escrutinio por comisión Escrutadora, los E-23, los E-20 Intro, los E-20 Retiro, los COR\_Corrección, los ACR Resumen mesa a mesa, los archivos planos CSV y demás archivos necesarios para hacer la auditoria del software. f. Se ORDENE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y

al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que se de ACCESO digital a los archivos planos: E-10, lista de sufragantes por mesa de votación; E-11, Acta de Instalación y registro de votantes; E-12 Autorización voto a no inscritos en E-10 (utilizado para voto de Jurados de la Mesa de votación); AES, Acta de Entrega de Software; RAP, Reporte de Auditoría de Procesos; RNC, reporte de Novedades de Comisión Escrutadora; E-20 Acta de introducción de documentos al arca triclave; E-20, Acta de Retiro de documentos del arca triclave; E-23 Constancias de la Comisión Escrutadora; E-24, Acta de Resultados; AGE, Acta General de Escrutinio; COR, Acta de Corrección de Mesas; ACR, Acta de Corrección de Resumen de Mesas Modificadas; E-26, Acta Parcial de Escrutinio; FRT, Formato Rápido de Transmisión; ECO de la transmisión de datos de Preconteo; E-14 de delegados; E-14 de Claveros; E-14 de delegados de cada día de elecciones, en cada mesa de votación en el exterior (porque son 7 días y cada día se hace cierre de mesa y se elabora un E-14), E-10, cada día de elecciones, de cada mesa de votación en el exterior (porque son 7 días y cada día se resalta la cédula de los electores que ejercieron su derecho al voto; E-11, registro de votantes de cada día de elecciones, para poder hacer cuadre de mesa. g. Se ORDENE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que se inscriban, seleccionen y capaciten adecuadamente los Jurados de Votación; h. Se ORDENE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que hagan la depuración del censo electoral y permitan hacer la auditoría del mismo para que no puedan seguir votando los ciudadanos que ya tienen partida de defunción, las fuerzas militares y los ciudadanos que tienen suspendidos sus derechos políticos. i. Se ORDENE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL el registro, capacitación y acreditación de DOS (2) Testigos por cada mesa de votación, a cada Candidato, partido político o coalición porque es físicamente imposible que una sola persona cumpla esa función durante la jornada electoral (de 7 am a 10 u 11 pm, hora en que termina el escrutinio de mesa y se cierra la jornada); j. Se ORDENE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL la acreditación de DOS (2) Coordinadores de Testigos por cada puesto de votación, a cada Candidato, partido político o coalición porque es físicamente imposible que una sola persona cumpla esa función durante la jornada electoral (de 7 am a 12 ó 1 de la madrugada, hora en que se entregan las bolsas selladas a los Claveros y quedan depositadas en las urnas triclave)

**NOTIFICACIONES:** Las ACCIONADAS recibirán notificaciones en las siguientes direcciones: 1. El Registrador Nacional, ALEXANDER VEGA ROCHA, en la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en la Avenida Calle 26 No. 51-50 -CAN, en la ciudad de Bogotá, y en el correo electrónico: [notificaciontutelas@registraduria.gov.co](mailto:notificaciontutelas@registraduria.gov.co). 2. El Consejo Nacional Electoral, y su Presidenta, DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, en la Av. El Dorado No. 51-80, en la ciudad de Bogotá, y en el correo electrónico: [cnenotificaciones@cne.gov.co](mailto:cnenotificaciones@cne.gov.co). La ACCIONANTE recibe notificaciones en las siguientes direcciones:

Dirección: Calle 45 A No. 25 A - 48  
Teléfono: 305 704 59 12  
Correos electrónicos: [veproel908@gmail.com](mailto:veproel908@gmail.com)